

Edición
en lengua española

Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	<i>I Comunicaciones</i>	
	Comisión	
2003/C 69/01	Tipo de cambio del euro	1
2003/C 69/02	Imposición de obligaciones de servicio público complementarias en los servicios aéreos regulares entre cualquier punto de Francia metropolitana, por un lado, y Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión, por otro ⁽¹⁾	2
2003/C 69/03	Declaración de la Comisión sobre las relaciones entre la Comunidad, sus Estados miembros y los terceros países en el campo del transporte aéreo	3
2003/C 69/04	Ayudas estatales — Países Bajos — Ayuda C 10/03 (ex NN 135/02) — «Steunverlening aan non-profitjachthavens» (Puertos de recreo sin ánimo de lucro) — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ⁽¹⁾	4
2003/C 69/05	Ayudas estatales — Reino Unido — Ayuda C 12/03 (ex 778/02) — Exención de la tasa del cambio climático para el metano de las minas de carbón — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE ⁽¹⁾	9

II Actos jurídicos preparatorios

.....

Número de información

Sumario (*continuación*)

Página

III *Informaciones*

Comisión

2003/C 69/06

Media Plus — Desarrollo, distribución y promoción (2001-2005) — Ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas — Convocatoria de propuestas EAC/03/2003 — Medidas de apoyo a la participación de obras y profesionales europeos en los festivales de cine organizados en terceros países 14

I

(Comunicaciones)

COMISIÓN

Tipo de cambio del euro ⁽¹⁾

21 de marzo de 2003

(2003/C 69/01)

1 euro =

Moneda			Moneda		
		Tipo de cambio			Tipo de cambio
USD	dólar estadounidense	1,0572	LVL	lats letón	0,6183
JPY	yen japonés	127,82	MTL	lira maltesa	0,4217
DKK	corona danesa	7,4281	PLN	zloty polaco	4,3087
GBP	libra esterlina	0,6757	ROL	leu rumano	35 785
SEK	corona sueca	9,164	SIT	tólar esloveno	231,7525
CHF	franco suizo	1,4756	SKK	corona eslovaca	41,915
ISK	corona islandesa	85,04	TRL	lira turca	1 820 000
NOK	corona noruega	7,8615	AUD	dólar australiano	1,7831
BGN	lev búlgaro	1,952	CAD	dólar canadiense	1,5654
CYP	libra chipriota	0,58377	HKD	dólar de Hong Kong	8,2449
CZK	corona checa	31,65	NZD	dólar neozelandés	1,919
EEK	corona estonia	15,6466	SGD	dólar de Singapur	1,8699
HUF	forint húngaro	246,42	KRW	won de Corea del Sur	1 319,07
LTL	litas lituana	3,4521	ZAR	rand sudafricano	8,617

⁽¹⁾ Fuente: tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

Imposición de obligaciones de servicio público complementarias en los servicios aéreos regulares entre cualquier punto de Francia metropolitana, por un lado, y Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión, por otro

(2003/C 69/02)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

1. En virtud de lo dispuesto en la letra a) del apartado 1 del artículo 4 del Reglamento (CEE) nº 2408/92 del Consejo, de 23 de julio de 1992, relativo al acceso de las compañías aéreas de la Comunidad a las rutas aéreas intracomunitarias, Francia ha decidido completar las obligaciones de servicio público relativas a los servicios aéreos regulares que operan entre cualquier punto de Francia metropolitana, por un lado, y Guadalupe, Guyana, Martinica y Reunión, por otro, publicadas en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* C 243 de 9 de agosto de 1997 con la referencia 97/C 243/02.

2. Además de las obligaciones de servicio público a que se refiere la publicación C 243/02 de 9 de agosto de 1997 arriba citada, la capacidad de servicios que debe ofrecerse globalmente entre el aeropuerto de París (Orly) y cada uno de los cuatro Departamentos de Ultramar en dos temporadas aeronáuticas consecutivas en cuanto al número de asientos mínimo es el siguiente:

- 1 100 000 para el servicio aéreo de Guadalupe,
- 183 000 para el servicio aéreo de Guyana,
- 1 000 000 para el servicio aéreo de Martinica,
- 660 000 para el servicio aéreo de Reunión.

Cabe señalar que en el aeropuerto de París (Orly) están reservadas franjas horarias para el servicio regular de los cuatro Departamentos de Ultramar, en virtud del artículo 9 del Reglamento (CEE) nº 95/93 del Consejo, de 18 de enero de 1993, relativo a normas comunes para la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios. Para obtener información sobre dichas franjas horarias, las compañías aéreas interesadas en esas rutas deberán dirigirse al coordinador de los aeropuertos parisinos.

3. La dirección indicada en la publicación 97/C 243/02 queda modificada como sigue:

Direction générale de l'aviation civile
Direction des transports aériens
50, rue Henry-Farman
F-75720 Paris Cedex 15.

DECLARACIÓN DE LA COMISIÓN**sobre las relaciones entre la Comunidad, sus Estados miembros y los terceros países en el campo del transporte aéreo**

(2003/C 69/03)

1. La Comisión recuerda que las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 5 de noviembre de 2002 dictadas en relación con los asuntos de «cielo abierto» tienen implicaciones no sólo en lo que se refiere a los ocho acuerdos específicos con Estados Unidos que fueron declarados incompatibles con el Derecho comunitario, sino también en lo que se refiere a todos los acuerdos bilaterales de servicios aéreos en que son parte los Estados miembros de la Unión Europea.

2. En respuesta a las sentencias del Tribunal y para adaptar las relaciones entre los Estados miembros y Estados Unidos al Derecho comunitario, la Comisión solicitó inmediatamente al Consejo que le otorgase un mandato para entablar negociaciones con Estados Unidos en nombre de la Comunidad con vistas a la celebración de un nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos. Por la presente Declaración, la Comisión reitera su petición.

3. Además, la Comisión ha adoptado una nueva propuesta y una recomendación de aprobación de un mandato general que, junto con el mandato para Estados Unidos, constituyen un paquete de medidas que permitirá crear un marco jurídico sólido para las negociaciones en curso y para la aplicación de los acuerdos de servicios aéreos, así como para el reparto adecuado de responsabilidades entre la Comunidad y sus Estados miembros. Esto presenta un interés particular para nuestras aerolíneas porque la prolongada incertidumbre sobre el futuro de los acuerdos internacionales podría frenar el desarrollo que están experimentando los servicios con terceros países.

4. Para afrontar las infracciones al Derecho comunitario en otros acuerdos bilaterales, la Comisión ha recomendado al Consejo la aprobación de un mandato general para las negociaciones entre la Comunidad y terceros países. El principal objetivo es la sustitución de las cláusulas de los acuerdos bilaterales que permiten a los terceros países discriminar a las compañías aéreas comunitarias según el criterio de la propiedad, lo que es contrario al derecho de establecimiento previsto en el Tratado. La Comisión considera que la apertura y la culminación con éxito de esas negociaciones son la mejor forma de hacer compatibles con el Derecho comunitario los acuerdos bilaterales. Por consiguiente, la Comisión insta al Consejo a adoptar urgentemente el mandato mencionado.

5. Además, la Comisión ha adoptado una propuesta de Reglamento sobre los procedimientos de negociación y aplicación de acuerdos bilaterales de servicios aéreos entre Estados miembros y terceros países en los ámbitos de su competencia. Este Reglamento proporcionará un marco jurídico claro que garantizará que los Estados miembros no favorezcan a una compañía comunitaria frente a otra en sus acuerdos bilaterales, al tiempo que permitirá a los Estados miembros continuar negociando modificaciones de esos acuerdos sin perjuicio de sus obligaciones y de las competencias que el Tratado otorga a la Comuni-

dad. La Comisión insta al Consejo y al Parlamento Europeo a aprobar la propuesta mencionada lo más rápidamente posible.

6. A la espera de la aprobación definitiva de los tres elementos de este paquete, la Comisión considera que es importante asegurar que los Estados miembros, en sus contactos con terceros países, cumplan determinados principios básicos para evitar conflictos con las disposiciones del Tratado y los requisitos del Derecho comunitario.

7. En virtud del artículo 10 del Tratado, los Estados miembros están obligados a asegurar el cumplimiento de las obligaciones que se derivan del mismo y a facilitar el cumplimiento de las misiones de la Comunidad. Por consiguiente, la Comisión insta a los Estados miembros a seguir estas pautas en sus relaciones con terceros países:

- Las acciones de los Estados miembros deben apoyar las iniciativas, negociaciones, políticas y objetivos de la Comunidad.
- Los Estados miembros no deben entrar en negociaciones sobre ningún asunto de competencia comunitaria o que sea objeto de negociaciones comunitarias en virtud de un mandato específico.
- En lo que respecta a sus propios acuerdos bilaterales, los Estados miembros deben informar a la Comisión de todas las negociaciones internacionales programadas y de sus resultados de forma que la Comisión pueda vigilar y coordinar las estrategias frente a terceros países y asegurar el respeto del Derecho comunitario.
- A la espera de la adopción del Reglamento arriba mencionado que especifica las reglas detalladas comunitarias en esta materia, los Estados miembros deben repartir entre las compañías comunitarias establecidas en su territorio todos los derechos de tráfico derivados de los acuerdos bilaterales que hayan suscrito de forma no discriminatoria, transparente y diligente.
- Sin perjuicio de la recomendación de un mandato general anteriormente mencionada, los Estados miembros deben aprovechar las oportunidades ofrecidas por los acuerdos bilaterales que los vinculan para conceder a todas las compañías comunitarias establecidas en su territorio el acceso a rutas con destino y origen en terceros países con criterios justos y equitativos para dotar de efectos prácticos el derecho de establecimiento previsto con arreglo al artículo 43 del Tratado.

8. La Comisión solicita a los Estados miembros que respeten estas directrices hasta la aprobación de los mandatos y la entrada en vigor del Reglamento propuesto para evitar infracciones del Derecho comunitario en el sector del transporte aéreo.

AYUDAS ESTATALES — PAÍSES BAJOS

Ayuda C 10/03 (ex NN 135/02) — «Steunverlening aan non-profitjachthavens» (Puertos de recreo sin ánimo de lucro)

Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE

(2003/C 69/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 5 de febrero de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a los Países Bajos su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda/medida antes citada. Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones sobre la medida respecto de la cual la Comisión ha incoado el procedimiento, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea
DG Competencia, Registro de Ayudas Estatales
J-70
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas a los Países Bajos. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN

Mediante carta de 1 de marzo de 2001, se presentó una denuncia a la Comisión sobre una posible distorsión de la competencia entre puertos deportivos en los Países Bajos. Según el demandante, varios puertos deportivos recibieron ayudas estatales para construir o realizar el mantenimiento de sus muelles. Como consecuencia, estos puertos deportivos pueden ofrecer, por ejemplo, precios de alquiler de sus muelles más bajos a las embarcaciones de recreo que hacen escala.

La Comisión hizo unas preguntas a las autoridades de los Países Bajos por carta de 11 de abril de 2001 (D/51551), a las que dichas autoridades respondieron por carta de 24 de mayo de 2001. Tras ser informado sobre esta correspondencia, el demandante envió información adicional mediante diversas cartas a lo largo del año 2001. Por carta de 11 de febrero de 2002 (D/50569) la Comisión pidió a las autoridades de los Países Bajos información detallada sobre varios casos específicos. Las autoridades de los Países Bajos dieron respuesta a las preguntas y enviaron información adicional (informes) por cartas de 10 de julio de 2002 y 2 de agosto de 2002.

Tres puertos deportivos, Enkhuizen, Nijkerk y Wieringermeer, están siendo objeto de investigación formal por parte de la Comisión.

- En Enkhuizen, el club náutico KNZ & RV compró al ayuntamiento una superficie acuática de 26 000 m² por 11 700 euros para construir muelles en la misma en fecha posterior. Según el demandante, cuando la superficie acuática se destina a «puerto deportivo» en esa zona, el valor de la superficie en cuestión sería de 390 000 euros.
- En 2000 el ayuntamiento de Nijkerk vendió el puerto deportivo local al club náutico local De Zuidwal por 0,45 euros. Basándose en la información facilitada por las auto-

ridades de los Países Bajos y por el demandante, la Comisión ha estimado el beneficio del club náutico De Zuidwal en 217 477 euros.

- El ayuntamiento de Wieringermeer vendió superficie acuática y terrenos en 2000 a la empresa Jachtwerf Jongert por valor de 7 636 147 euros. Los costes de construcción de los terrenos recuperados fueron de 9 892 409 euros. Puesto que los terrenos se crearon en menos de tres años antes de ser vendidos, el comportamiento del ayuntamiento no parece acorde con la letra d) del apartado 2 del punto II de la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos⁽¹⁾.

La Comisión considera las actividades de los puertos deportivos como actividades económicas regulares en el sector turístico. En la Decisión de la Comisión de 7 de enero de 2000 [N 582/99 – Italia, «Marina di Stabia S.p.A.»⁽²⁾], la Comisión concluyó que las ayudas estatales a un puerto deportivo refuerzan su posición respecto de otros puertos deportivos competidores de otros Estados miembros. La presunta ayuda económica a los puertos deportivos en cuestión financiada con ayudas estatales reforzará la posición de los puertos deportivos beneficiarios, lo que puede producir un cambio en las condiciones de mercado para sus competidores. Por lo que se refiere a los efectos sobre los intercambios comerciales entre Estados miembros (cuarto criterio para las ayudas estatales en el sentido del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE), las actividades de los puertos deportivos en cuestión pueden considerarse marginales. No obstante, no pueden descartarse automáticamente los efectos sobre los intercambios comerciales, aunque sólo fuera por el carácter móvil por naturaleza de las embarcaciones de recreo.

⁽¹⁾ DO C 209 de 10.7.1997, p. 3.

⁽²⁾ DO C 40 de 12.2.2000, p. 2.

En cuanto a la compatibilidad de la ayuda, no parece aplicable ninguna de las exenciones previstas por el Tratado CE. Las exenciones previstas por el apartado 2 del artículo 87 CE y por las letras b) y d) del apartado 3 de dicho artículo son manifiestamente irrelevantes. Las autoridades de los Países Bajos no han alegado, ni así lo ha considerado la Comisión, que la ayuda pudiera tener un objetivo de desarrollo regional de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 CE⁽³⁾. La ayuda no parece promover ningún objetivo comunitario horizontal de conformidad con la letra c) del apartado 3 del artículo 87 CE. Por último, la Comisión no considera oportuno favorecer el desarrollo del sector de puertos deportivos en el sentido de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 CE.

Por consiguiente, la Comisión se ve obligada a incoar el procedimiento de investigación formal ya que el examen preliminar no permite resolver todos los problemas planteados por la cuestión de si la medida constituye ayuda estatal en el sentido del apartado 1 del artículo 87 CE. La Comisión no está en condiciones, en el curso de su examen preliminar, de asegurar que la medida en cuestión sería en cualquier caso compatible con el mercado común aún cuando se tratara de una ayuda. Por consiguiente, la clasificación de la medida como ayuda estatal es meramente provisional y el objetivo mismo de la presente decisión de incoar el procedimiento de investigación formal es permitir a la Comisión recabar todas las opiniones que necesita para poder adoptar una decisión definitiva al respecto.

CARTA

«De Commissie deelt de Nederlandse autoriteiten hierbij mede dat zij, na onderzoek van de informatie die zij over bovengenoemde maatregel hebben verstrekt, heeft besloten de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag in te leiden.

1. PROCEDURE

Bij schrijven van 1 maart 2001 werd er een klacht ingediend bij de Commissie over mogelijke concurrentievervalsing tussen jachthavens in Nederland. Nederlandse jachthavens worden zowel door non-profitorganisaties (normaliter zeilverenigingen), als particuliere ondernemingen gedreven. Volgens de klager hadden verschillende non-profit jachthavens staatssteun ontvangen om ligplaatsen aan te leggen of te onderhouden. Hierdoor kunnen deze jachthavens bijvoorbeeld een lagere huurprijs voor de ligplaatsen aanrekenen aan passanten.

Aanvankelijk richtte de klacht zich op een enkel project in Enkhuizen, het zogenaamde Gependam-project, waarbij volgens de klager de plaatselijke zeilvereniging aanzienlijke steun had ontvangen in de vorm van een buitensporig lage aankoopsprijs voor een watergebied. De Commissie stelde de Nederlandse autoriteiten bij brief van 11 april 2001 (D/51551) vragen, waarop zij bij schrijven van 24 mei 2001 antwoordden.

Na van deze correspondentie op de hoogte te zijn gebracht, stuurde de klager in de loop van 2001 bij verschillende brieven aanvullende informatie over deze zaak en zes andere zaken. Bij schrijven van 11 februari 2002 (D/50569) verzocht de Com-

missie de Nederlandse autoriteiten om uitgebreide inlichtingen over deze zeven zaken.

Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten vond er op 3 mei 2002 een bilaterale bijeenkomst plaats tussen de diensten van de Commissie en de Nederlandse autoriteiten. De Nederlandse autoriteiten zonden antwoorden op de vragen en aanvullende informatie (rapporten) toe bij brieven van 10 juli 2002 en 2 augustus 2002.

Op basis van de verkregen informatie hebben de diensten van de Commissie een overzicht van de zeven zaken opgesteld, dat bij brief van 8 augustus 2002 aan de klager werd gezonden. In dit overzicht werd een onderscheid gemaakt tussen enerzijds drie zaken waarvoor de diensten van de Commissie twijfels hadden of er staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag in het geding was, en anderzijds vier zaken waarvan de Commissie meende dat er geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag mee gemoeid was. Bij brief van 3 september 2002 stemde de klager met het overzicht in en verstrekke aanvullende informatie over de drie resterende zaken.

2. BESCHRIJVING

De Commissie stelt nader onderzoek in naar drie jachthavens, te weten die in Enkhuizen, Nijkerk en Wieringermeer.

2.1. Enkhuizen

De gemeente Enkhuizen besloot in 1998 een nieuwe haven voor charterschepen en pleziervaartuigen aan te leggen. Vanwege de aanleg van deze nieuwe haven moest de bestaande toegang tot de zeilvereniging KNZ & RV worden gesloten. Als compensatie voor deze sluiting trof de gemeente drie maatregelen:

- (1) De gemeente zorgde voor de ontsluiting van de jachthaven van KNZ & RV op een nabijgelegen locatie.
- (2) De gemeente heeft een deel van het water vlakbij de bestaande jachthaven uitgebaggerd, teneinde de vereniging in de gelegenheid te stellen om in een later stadium op eigen kosten 105 ligplaatsen aan te leggen. De Nederlandse autoriteiten hebben een onafhankelijke rapport overgelegd waarin de kosten van het uitbaggeren van de toekomstige jachthaven werden getaxeerd op 96 655 EUR.
- (3) Tenslotte kreeg de zeilvereniging KNZ & RV de gelegenheid om het uitgebaggerde watergebied (26 000 m²) van de gemeente te kopen voor dezelfde prijs per m² als de gemeente in 1998 voor hetzelfde gebied aan de nationale overheid had betaald. Deze prijs per m² was vastgesteld in een onafhankelijk taxatierapport van 30 maart 1998, waarin de taxateur concludeerde dat dit wateroppervlak (waarvan een deel tot het IJsselmeer behoorde) geen economische waarde had. Volgens de Nederlandse autoriteiten gaan Nederlandse taxateurs in dat geval gewoonlijk uit van een basiswaarde per m² van 0,45 EUR/m². De totale oppervlakte van het (water)perceel dat door de zeilvereniging werd gekocht bedroeg 26 000 m², waarmee de totale koopprijs op 11 700 EUR (26 000 × 0,45) kwam.

⁽³⁾ En los Países Bajos no existen zonas a) del apartado 3 del artículo 87.

Voor water in dit gebied dat bestemd is als „jachthaven”, bedraagt de gemiddelde verkoopprijs, volgens de klager, ongeveer 15 EUR/m². Aangezien het water aan de zeilvereniging was verkocht met de bedoeling hier in de toekomst ligplaatsen te creëren, was de eigenaar van het water (de gemeente) op de hoogte van de toekomstige bestemming van het water; bijgevolg had de gemeente zich bewust moeten zijn van de economische waarde ervan. Volgens de klager heeft dit (water)perceel een waarde van 390 000 EUR (26 000 × 15).

Volgens de gemeente waren passerende boten door de nieuwe toegang genoodzaakt een omweg te maken om de bestaande jachthaven van KNZ & RV te bereiken. Volgens een onafhankelijke rapport (waartoe de gemeente opdracht had gegeven) leidt de omweg in de komende dertien jaar tot een daling met 10 % van het aantal passanten dat de haven aandoet. De totale netto contante inkomstenderving wordt op 80 700 EUR geraamd.

De Commissie is in dit stadium van mening dat de nieuwe ontsluiting van de jachthaven (1) gezien moet worden als infrastructurele compensatie door de gemeente voor de sluiting van de vroegere toegang. Deze maatregel zou derhalve geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag bevatten.

De Nederlandse autoriteiten beschouwen het uitbaggeren (kosten 96 655 EUR) als een maatregel ter compensatie van de geschatte inkomstenderving als gevolg van de sluiting van de vroegere toegang door de plaatselijke autoriteiten (kosten 80 700 EUR). De Commissie heeft een mogelijke overcompensatie geconstateerd van 15 955 EUR (96 655 EUR – 80 700 EUR). De Commissie heeft echter geen informatie of het uitbaggeren heeft plaatsgevonden voor of na de verkoopovereenkomst (maatregel 3) ⁽⁴⁾. De Commissie kan op dit moment niet vaststellen in hoeverre het uitbaggeren van het waterperceel een voordeel was voor de zeilclub KNZ & RV.

De Commissie koestert twijfel omtrent het staatssteunbestanddeel in de verkoop van het watergebied door de gemeente aan de zeilvereniging (3). Op basis van de informatie die door de Nederlandse autoriteiten en door de klager is verstrekt, kan de Commissie een mogelijke staatssteuncomponent niet uitsluiten, gezien de prijs die voor het gebied (11 700 EUR) is betaald en de vermeende waarde van het perceel (390 000 EUR). Het verschil tussen deze prijzen bedraagt 378 300 EUR, hetgeen boven het plafond ligt dat is vastgelegd in Verordening (EG) nr. 69/2001 van de Commissie van 12 januari 2001 betreffende de toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de minimis-steun ⁽⁵⁾. Het voordeel voor de zeilvereniging KNZ & RV in deze verkoopovereenkomst wordt derhalve op 378 300 EUR geschat.

⁽⁴⁾ Indien het uitbaggeren plaatsvond voor de verkoopovereenkomst, zou de verkoopprijs voor het waterperceel een verkoopprijs van uitgebaggerd water moeten reflecteren. Indien het uitbaggeren plaatsvond na de verkoopovereenkomst, zou de prijs betaald voor het waterperceel de verkoopprijs van ongebaggerd water moeten reflecteren, waarbij de baggerkosten zouden moeten worden toegerekend aan de koper van het waterperceel (zeilclub KNZ & RV).

⁽⁵⁾ PB L 10 van 13.1.2001, blz. 30.

Het totale voordeel voor de zeilvereniging KNZ & RV wordt derhalve op 394 255 EUR geschat ⁽⁶⁾.

2.2. Nijkerk

De gemeente Nijkerk was de eigenaar van een plaatselijke jachthaven die in 1966 werd aangelegd. De jachthaven werd in 2000 geprivatiseerd en aan de huurder verkocht, de plaatselijke zeilvereniging De Zuidwal. In 1998 werd de jachthaven door een onafhankelijke deskundige getaxeerd op 417 477 EUR. De Nederlandse autoriteiten hebben een kopie van het taxatierapport toegezonden. Deze taxatieprijs was gebaseerd op de premisse dat de jachthaven niet vervuild, goed onderhouden en in verhuurde staat was (zonder huurder werd de jachthaven op 521 847 EUR getaxeerd).

De jachthaven was echter wel verontreinigd en er was veel achterstallig onderhoud. In de koopovereenkomst tussen de gemeente en de club van 27 maart 2000 stemde de zeilvereniging erin toe alle kosten op zich te nemen voor de sanering van het water en het achterstallige onderhoud van de havenfaciliteiten. De gemeente schatte de kosten voor het achterstallige onderhoud in 2000 op 272 268 EUR en de saneringskosten op 145 201 EUR. Deze schattingen werden door gemeenteambtenaren gedaan op basis van hun praktijkervaring. De gemeente trok deze kosten af van de geschatte waarde van de jachthaven, hetgeen een verkoopprijs van 0,45 EUR (1 gulden) voor de gehele jachthaven opleverde.

Nadat de Commissie hierover vragen had gesteld bij brief van 11 februari 2002, gaven de Nederlandse autoriteiten opdracht tot een nieuwe, onafhankelijke taxatie van de kosten van het achterstallige onderhoud en de sanering. In het rapport van 20 juli 2002 werden de kosten van het achterstallige onderhoud op 200 000 EUR en de saneringskosten op 600 000 EUR geraamd.

Wat betreft het achterstallige onderhoud is de Commissie het eens met het onafhankelijke taxatierapport en de korting van 200 000 EUR op de in 1998 geschatte waarde van de jachthaven.

Bij de saneringskosten maakten de Nederlandse autoriteiten een onderscheid tussen de kosten voor de sanering van de nabijgelegen vaart (Arkervaart) en de jachthaven. Volgens hen wordt de vaart, die in verbinding staat met de jachthaven, vervuild door verschillende gebruikers die niets met de jachthaven te maken hebben. Derhalve hebben de Nederlandse autoriteiten besloten dat de zeilvereniging niet aansprakelijk is voor enige vervuiling, zelfs niet in de jachthaven. Toen in de loop van 2002 bleek dat de kosten van de sanering zeer hoog opliepen, besloot de gemeente bovendien hiervan 25 % voor haar rekening te nemen. Bijgevolg zal de zeilvereniging 450 000 EUR aan saneringskosten betalen. Volgens de Nederlandse autoriteiten heeft de zeilvereniging daarom nog op de koopovereenkomst moeten toeleggen (d.w.z. 200 000 + 450 000 – 417 477 = 232 522 EUR).

⁽⁶⁾ 15 955 EUR (overcompensatie maatregel 2) plus 378 300 EUR (overcompensatie maatregel 3).

Ten aanzien van de saneringskosten betwijfelt de Commissie of het beginsel van de vervuiler betaalt, juist is toegepast op de transactie. De Commissie sluit in dit stadium niet uit dat de zeilvereniging De Zuidwal verantwoordelijk (en aansprakelijk) is voor de vervuiling van haar jachthaven. Volgens dit beginsel zou de jachthaven moeten worden verkocht voor (417 477 – 200 000 =) 217 477 EUR.

Tenslotte, wat betreft de gehanteerde taxatieprijs heeft de Commissie opgemerkt dat de jachthaven werd verkocht aan de verhuurder. De Commissie twijfelt derhalve of het correct is de taxatieprijs te gebruiken voor een jachthaven in verhuurde staat. Immers, door de aankoop verkreeg de zeilclub volledig vrij gebruik van de jachthaven. Het verschil tussen de twee taxatieprijzen (met en zonder verhuurder) bedraagt 95 370 EUR.

Met de inlichtingen die door de Nederlandse autoriteiten en de klager zijn verschaft, beschikt de Commissie over voldoende informatie om twijfels te hebben omtrent het steunbestanddeel dat in de koopovereenkomst van de gemeente met de zeilvereniging vervat is. Het geschatte voordeel voor de zeilvereniging De Zuidwal bedraagt derhalve 312 847 EUR ⁽⁷⁾.

2.3. Wieringermeer

De gemeente Wieringermeer verkocht in 2000 een waterperceel en grond aan Jachtwerf Jongert BV. Bij schrijven van 10 juli 2002 gaven de Nederlandse autoriteiten het volgende overzicht van de geschatte waarde van de betreffende percelen en de feitelijke verkoopprijs:

Geschatte waarde grond:	5 719 854 EUR	(84 028 m ² tegen 64,07 EUR/m ²)
Geschatte waarde water:	+ 105 211 EUR	(69 031 m ² tegen 1,51 EUR/m ²)
Totale geschatte waarde:	5 825 065 EUR	
Totale verkoopprijs:	7 636 147 EUR	
Vershil verkoopprijs/ taxatie:	1 811 082 EUR.	

De prijs van de grond lijkt in orde te zijn, aangezien in het taxatierapport verschillende referenties voor vergelijkbare grondprijzen worden gegeven. De geschatte waarde van het waterperceel (in totaal 69 731 m²) tegen een prijs van 1,51 EUR per m² lijkt onder de marktprijs te liggen. Het taxatierapport bevat geen referenties of verdere uitleg over deze geschatte waarde. Het probleem van overcompensatie doet zich echter pas voor wanneer de waarde van het water meer dan 29,21 EUR/m² bedraagt ⁽⁸⁾. Aangezien deze drempel nogal hoog is, wordt er op grond van de huidige cijfers niet van uitgegaan dat er sprake is van overcompensatie. De Commissie heeft de klager derhalve bij brief van 8 augustus 2002 medegedeeld dat er geen bewijs is gevonden van onrechtmatig verleende overheidssteun.

⁽⁷⁾ 217 477 EUR (vervuiling) plus 95 370 EUR (verschil in taxatieprijzen).

⁽⁸⁾ 7 636 147 EUR – 5 719 854 EUR (taxatie grond) = 1 916 293 EUR + 100 000 EUR (de minimis) = 2 016 293 EUR. 2 016 293 EUR/69 031 m² = 29,21 EUR/m².

De klager deelde de Commissie bij schrijven van 3 september 2002 mede dat de gemeente de grond in het IJsselmeer kunstmatig heeft gewonnen, hetgeen zeer veel geld kost. De kosten van de drooglegging bedroegen 9 892 409 EUR. Aangezien de landwinning minder dan drie jaar voor de verkoop plaatsvond, lijkt het gedrag van de gemeente niet te stroken met punt II, 2d) van de mededeling van de Commissie betreffende staatssteunelementen bij de verkoop van gronden en gebouwen door openbare instanties ⁽⁹⁾.

3. STANDPUNT VAN DE NEDERLANDSE AUTORITEITEN

De Nederlandse autoriteiten zijn van mening dat de drie genoemde gevallen geen staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag behelzen. Volgens de Nederlandse autoriteiten blijkt uit de verschillende onafhankelijke taxatierapporten dat er geen sprake is van overcompensatie.

4. BEOORDELING

Er zijn een flink aantal kleine particuliere ondernemingen en non-profitorganisaties actief op de Nederlandse jachthavenmarkt. De volgende tabel bevat een overzicht van de meest recente statistische gegevens ⁽¹⁰⁾.

	Commerciële jachthavens	Non-profit jachthavens	Totaal:
Aantal jachthavens	564	575	1 136
Aantal ligplaatsen	76 000	91 350	167 350
Gemiddeld aantal ligplaatsen	135	170	147
Aantal (betaalde) werknemers	1 100	210	1 310
Vrijwilligers	300	1 700	2 000

De Commissie beschouwt de activiteiten van jachthavens als een gewone economische activiteit in de toeristische sector. In haar besluit van 7.1.2000 (N 582/99 — Italië, „Marina di Stabia SpA” ⁽¹¹⁾) is de Commissie tot de slotsom gekomen dat overheidssteun aan een jachthaven zijn positie versterkt ten opzichte van andere concurrerende jachthavens in andere lidstaten. Deze Italiaanse jachthaven was veel groter dan de onderhavige Nederlandse jachthaven; ook werd het geval in Italië aangemeld in het kader van de multisectorale kaderregeling betreffende regionale steun voor grote investeringsprojecten ⁽¹²⁾.

⁽⁹⁾ PB C 209 van 10.7.1997, blz. 3. Punt II, 2d stelt: „De kosten die de openbare instanties oorspronkelijk hebben gemaakt bij de aankoop van gronden of gebouwen vormen een aanwijzing voor de marktwaarde, tenzij er tussen de aankoop en de verkoop van dat onroerend goed een aanzienlijke tijd is verstreken. Gedurende een periode van ten minste drie jaar na de verwerving van een grondstuk of gebouw mag de vastgestelde marktwaarde in beginsel niet lager liggen dan de oorspronkelijke aankoopprijs, tenzij de onafhankelijke taxateur specifiek een algemene daling van de marktprijs voor gronden en gebouwen op de relevante markt heeft vastgesteld”.

⁽¹⁰⁾ Overzicht van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), cijfers voor 1997.

⁽¹¹⁾ PB C 40 van 12.2.2000, blz. 2.

⁽¹²⁾ PB C 107 van 7.4.1998, blz. 7.

De vermeende financiële steun uit overheidsmiddelen aan de onderhavige jachthavens zal de positie van de begunstigden versterken. Dit kan tot een verandering leiden in de marktvoorwaarden voor hun concurrenten.

Er is derhalve al aan drie van de vier criteria voor staatssteun voldaan, d.w.z. overheidsmiddelen, selectiviteit en voordeel. Wat betreft de gevolgen voor het handelsverkeer tussen de lidstaten (vierde criterium voor staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag) kunnen de activiteiten van de onderhavige jachthavens als vrij marginaal worden beschouwd. Er kan evenwel niet zonder meer worden uitgesloten dat er geen gevolgen zijn voor het handelsverkeer, al was het maar vanwege het mobiele karakter van pleziervaartuigen.

Ten aanzien van de verenigbaarheid van deze steun lijkt geen van de afwijkingen die in het EG-Verdrag zijn voorzien, van toepassing te zijn. De uitzonderingen die in artikel 87, leden 2 en 3, onder b) of d), van het EG-Verdrag zijn voorzien, zijn duidelijk niet relevant. Voorts hebben de Nederlandse autoriteiten niet aangevoerd dat de steun bedoeld was voor regionale ontwikkeling overeenkomstig artikel 87, lid 3, onder c), EG-Verdrag, en volgens de Commissie was dit ook niet het geval ⁽¹³⁾. Ook lijkt de steun niet te zijn verleend tot bevordering van een horizontale Gemeenschapsdoelstelling in de zin van artikel 87, lid 3, onder c), EG-Verdrag, zoals onderzoek en ontwikkeling, werkgelegenheid, opleiding, milieu, kleine en middelgrote ondernemingen of reddings- en herstructureringssteun in de zin van de betreffende richtsnoeren en kaderregelingen. En tenslotte achtte de Commissie het niet passend om de ontwikkeling van de jachthavensector te bevorderen op grond van artikel 87, lid 3, onder c), EG-Verdrag.

De Commissie is derhalve genooddaakt de formele onderzoeksprocedure in te leiden, aangezien zij op grond van haar eerste

onderzoek niet in staat is alle problemen op te lossen die verband houden met de vraag of de onderzochte maatregel staatssteun vormt in de zin van artikel 87, lid 1, van het EG-Verdrag. De Commissie heeft zich in de loop van haar eerste onderzoek niet ervan kunnen vergewissen dat de onderhavige maatregel hoe dan ook verenigbaar is met de gemeenschappelijke markt, zelfs wanneer het steun zou betreffen. Het besluit om de maatregel als staatssteun aan te merken, heeft dan ook louter een voorlopige karakter en is enkel bedoeld om de Commissie in staat te stellen alle nodige inlichtingen in te winnen om een definitieve beschikking dienaangaande te kunnen vaststellen ⁽¹⁴⁾.

5. CONCLUSIE

Gelet op de bovenstaande overwegingen verzoekt de Commissie Nederland in het kader van de procedure van artikel 88, lid 2, van het EG-Verdrag binnen een maand vanaf de datum van ontvangst van dit schrijven zijn opmerkingen te maken en alle dienstige inlichtingen te verstrekken voor de beoordeling van de steunmaatregelen. In het bijzonder zou de Commissie graag vernemen, voor elk van de onderhavige jachthavens en voor de Nederlandse jachthavensector in het algemeen, welk aandeel van hun jaarlijkse omzet gegenereerd wordt door vaste of pas-santenligplaatsen voor vaartuigen uit andere landen van de EU. Zij verzoekt uw autoriteiten onverwijld een afschrift van deze brief aan de potentiële begunstigden van de steunmaatregelen te doen toekomen.

De Commissie wijst Nederland op de schorsende werking van artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag. Zij verwijst naar artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad, volgens hetwelk elke onrechtmatige steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd.».

⁽¹³⁾ Er is geen artikel 87, 3 a)-gebied in Nederland.

⁽¹⁴⁾ Zie in dit verband het arrest van het Gerecht van Eerste Aanleg van 23.10.2002 in de gevoegde zaken T-269/99, T-271/99 en T-272/99 (Territorio Histórico de Guipúzcoa — Diputación Foral de Guipúzcoa, Territorio Histórico de Álava — Diputación Foral de Álava en Territorio Histórico de Vizcaya — Diputación Foral de Vizcaya v Commissie), r.o. 45 en 47.

AYUDAS ESTATALES — REINO UNIDO

Ayuda C 12/03 (ex 778/02) — Exención de la tasa del cambio climático para el metano de las minas de carbón**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE**

(2003/C 69/05)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 5 de febrero de 2003, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó al Reino Unido su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la medida antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta que figura a continuación, enviándolas a:

Comisión Europea
Dirección General de Competencia
Dirección G
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 296 12 42.

Dichas observaciones serán comunicadas al Reino Unido. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

RESUMEN**1. Descripción**

El 5 de diciembre de 2002, el Reino Unido notificó la exención de los proveedores de electricidad generada a partir del metano de minas de carbón (MMC) abandonadas de la tasa del cambio climático (TCC).

El MMC es un gas de efecto invernadero potente que se encuentra en la atmósfera. Actualmente, hay cuatro instalaciones de MMC que se utilizan para generar electricidad, con una capacidad de producción total de 35 MW.

El objetivo del sistema es incentivar al sector para que ponga en marcha otras instalaciones, aproximadamente unas cuarenta minas de carbón abandonadas, lo que permitiría aumentar la capacidad en 175 MW. Al no conocerse con exactitud el nivel de beneficio medioambiental que aportará el sistema, el Gobierno se propone revisar la exención en 2004-2005. No obstante, se ha notificado que el sistema tendrá una duración de diez años.

La ayuda se concede en forma de una exención fiscal con un importe fijo de 4,30 libras esterlinas (GBP) por MWh de electricidad generada a partir de MMC. Dado que, de las 40 instalaciones que previsiblemente se beneficiarán de la exención, no todas serán deficitarias en una medida comparable al nivel de las ayudas, la medida conllevará un gasto innecesario.

El sistema beneficiará directamente a los generadores/proveedores de electricidad derivada del MMC, pero es probable que la exención fiscal se comparta con la empresa encargada de extraer el gas. Actualmente existen tres empresas que extraen MMC para venderlo a los generadores de electricidad del

Reino Unido. También hay tres productores de electricidad que trabajan con ellos.

2. Evaluación**2.1. Postura del Estado miembro**

El Gobierno británico sostiene que, al igual que la Comisión decidió que la exención fiscal para la electricidad proveniente de fuentes renovables no constituía una ayuda estatal⁽¹⁾, esta medida se inscribe también en la lógica y la naturaleza del régimen fiscal. No obstante, aunque la exención constituyera una ayuda estatal, podría aprobarse en aplicación de la sección F, «Políticas, medidas e instrumentos destinados a reducir los gases de efecto invernadero», puntos 68-71, de las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente.

2.2. Evaluación preliminar de la Comisión**2.2.1. Existencia de ayuda estatal**

La medida favorecerá a los generadores de electricidad que utilizan el MMC como fuente de energía y, consecuentemente, es una medida selectiva. Las ventajas se conceden a través de fondos estatales dado que el Estado sufre una pérdida de ingresos fiscales. Los beneficiarios ejercen una actividad económica en mercados en los cuales se producen intercambios comerciales entre los Estados miembros. Por lo tanto, el sistema falsea o amenaza con falsear la competencia y podría afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros.

⁽¹⁾ Decisión de la Comisión relativa a la ayuda estatal C 18/01 (ex N 123/2000), publicada en el DO C 185 de 30.6.2001, p. 22.

La Comisión duda de que la ventaja selectiva que concede la medida esté justificada por la lógica y la naturaleza del propio régimen fiscal. El impuesto se aplica debido a los efectos perjudiciales que el consumo de energía tiene sobre el cambio climático. Por tanto, está en la naturaleza del impuesto eximir el consumo de energía cuya producción no tiene efectos perjudiciales. Así ocurre, por ejemplo, en el caso de la electricidad generada a partir de fuentes renovables, dado que estas fuentes no contribuyen al CO₂ de ciclo largo. La producción de electricidad a partir del MMC tiene, al igual que la producción de electricidad a partir de otras fuentes de energía fósiles, efectos perjudiciales y, por tanto, no tiene la misma naturaleza que la electricidad generada a partir de fuentes renovables. De hecho, la producción de electricidad de MMC no difiere, en lo que respecta a las emisiones de CO₂, de la producción de electricidad generada a partir del gas natural. No obstante, es cierto que el uso de MMC para la producción de electricidad evita que el metano se propague en la atmósfera, dado que cuando éste no se utiliza se producen fugas. La opinión preliminar de la Comisión es que este hecho no altera la naturaleza de la ayuda en lo que respecta a la existencia de una ayuda estatal.

2.2.2. Compatibilidad de la ayuda con las normas sobre ayudas estatales

La ayuda no parece ser compatible con las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales en favor del medio ambiente (en lo sucesivo, «las Directrices») ⁽²⁾.

La medida prevé una exención nueva y completa, durante diez años, de un impuesto medioambiental existente. Para tal exención, el punto 51.2 de las Directrices requiere que las excepciones en favor de las empresas beneficiarias sean necesarias como consecuencia de una modificación significativa de las condiciones económicas que coloque a las empresas en una situación competitiva especialmente difícil. No parece que se cumpla esta condición.

El MMC y la producción de electricidad a partir de MMC no son fuentes de energía renovables de conformidad con las Directrices y la Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad ⁽³⁾. De todos modos, la Comisión considera que no se respetan las disposiciones de la sección E.3.3 de las Directrices.

El punto 51.3 de las Directrices permite que los Estados miembros puedan asimismo fomentar la puesta a punto de procesos de generación de electricidad a partir de energías tradicionales, como por ejemplo el gas, que permitan alcanzar una eficacia energética muy sensiblemente superior a la obtenida por los procesos tradicionales de producción. En tal supuesto, se puede aprobar una exención total de impuestos por un período de cinco años. La Comisión duda de que esta disposición pueda aplicarse en este caso. Además, la duración de diez años notificada supera la duración de cinco años permitida.

Las disposiciones relativas a la gestión de residuos y el ahorro de energía (puntos 42 a 46 de las Directrices) tampoco parecen

cumplirse. La ayuda no es decreciente, no se limita a la estricta compensación de los costes de producción adicionales en relación con los precios de mercado del producto o servicio de que se trate, ni su duración máxima es de cinco años. También es cuestionable que la medida pretenda gestionar residuos o ahorrar energía.

La sección F de las Directrices, titulada «Políticas, medidas e instrumentos destinados a reducir los gases de efecto invernadero», se aplica a las ayudas estatales en el marco de políticas y medidas comunes coordinadas en el ámbito comunitario, incluyendo instrumentos económicos, así como instrumentos instituidos por el propio Protocolo de Kioto, concretamente los permisos negociables, la aplicación conjunta y el mecanismo para un desarrollo limpio. La Comisión tiene dudas de que esta sección sea aplicable en este caso.

El Reglamento (CE) n° 1407/2002 del Consejo, de 23 de julio de 2002, sobre las ayudas estatales a la industria del carbón ⁽⁴⁾ tampoco parece aplicable.

No obstante, la Comisión reconoce el beneficio medioambiental para la protección del clima que se puede derivar de esta medida, a pesar de que las Directrices no prevean ayudas en favor de tales medidas. Sin embargo, hoy por hoy, la Comisión duda de que la medida, tal y como está concebida, pueda provocar una compensación excesiva.

Por todas estas razones, en la actualidad, la Comisión duda de que la medida sea compatible con el artículo 87 del Tratado CE.

La cantidad de electricidad que se podría producir a partir del MMC en el Reino Unido no es desdeñable. La Comisión tiene en cuenta las posibilidades que ofrece la electricidad generada a partir de MMC no sólo en el Reino Unido sino también en el resto de los Estados miembros. La Comisión también toma en consideración que los Estados miembros están barajando la posibilidad de una exención facultativa de la ecotasa de electricidad generada a partir de MMC en el contexto del proyecto de Directiva sobre la imposición de los productos energéticos ⁽⁵⁾. Por estas razones, la Comisión desea dar a los terceros la posibilidad de presentar observaciones sobre la medida en cuestión.

CARTA

«The Commission wishes to inform the United Kingdom that, having examined the information supplied by your authorities on the measure referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the EC Treaty.

1. Description of the measure

By letter of 5 December 2002, registered by the Secretariat General on the same day (SG(2002) A/11958), the United Kingdom notified the exemption from Climate Change Levy (CCL) charged to suppliers of electricity produced from Coal Mine Methane (CMM) from abandoned coal-mines.

⁽²⁾ DO C 37 de 3.2.2001, p. 3.

⁽³⁾ DO L 283 de 27.10.2001, p. 33.

⁽⁴⁾ DO L 205 de 2.8.2002, p. 1.

⁽⁵⁾ Fisc 311 Rev 1 ADD de 9.12.2002.

The basic legislation for the CCL is contained in Schedule 6 to the Finance Act 2000. Section 126 of the Finance Act 2002 amends Schedule 6 to the Finance Act 2002 by inserting a new subparagraph (4A) after subparagraph (4) of paragraph 19 of Schedule 6 of the Finance Act 2000⁽⁶⁾. It will exempt from CCL supplies of electricity generated from CMM from a day to be appointed by Treasury Order. The relevant secondary legislation (Regulations 46 to 51 of the CCL (General) Regulations 2001 – SI 2001/838) will include CMM within their scope.

CMM is a potent greenhouse gas, currently venting into the atmosphere. At present, there are four CMM extraction sites being utilised for electricity generation with a total generating capacity of 35 MW.

The aim of the scheme is to incentivise the industry to develop further installations at about 40 further sites of abandoned coal-mines, with around 175 MW added capacity. Because of the uncertainty over the exact level of the environmental benefit from the scheme, the Government intends to hold a review of the exemption in 2004/05. The scheme however is notified for a duration of ten years.

The minimum value of the exemption in its first year of operation will be around GBP 1 million. If the uptake of electricity generation plants fuelled by CMM occurs as planned, revenue foregone rises to GBP 6,3 million per annum.

The aid operates by giving a tax exemption equal to a flat rate of GBP 4,30 per MWh of electricity generation from CMM. As the estimated 40 plants incentivised by the exemption will not be all uneconomical up to point of the full support level, the measure will involve some dead-weight loss.

The scheme will directly benefit the generators/suppliers of electricity derived from CMM, but the tax exemption is likely to be shared with the company which extracts the gas. There are three companies who currently extract CMM to sell to electricity generators in the United Kingdom. These are Alkane Energy, StrataGas and Octagon Energy. The electricity generators working with them are Clarke Energy, Scottish and Southern Energy and Warwick Energy.

2. Assessment

2.1. The Member State's position

The United Kingdom Government argues that in the same way as the Commission decided that the tax exemption for electricity from renewable sources did not constitute State aid⁽⁷⁾, also the current measure is in the logic and nature of the tax scheme. This for the following reason: There are two main ways to reduce greenhouse gas emissions relating to a given level of non-domestic energy consumption. The first is to promote the use of technologies that do not contribute nega-

tively to long-cycle greenhouse gas emissions, and this is the logic behind the exemption for certain renewable energy sources. The second is to promote the use of technologies which decrease the greenhouse gas emissions from given levels of production from other sources. Allowing CMM to escape into the atmosphere rather than harness and make use of it has a significant detrimental effect. By exempting CMM derived electricity from the CCL, significant greenhouse gas savings will be made. The environmental benefit in terms of carbon equivalent emissions avoided per kWh is as much as nine times greater than the carbon avoided from renewable sources when they are compared to what is currently considered to be the marginal fossil fuel energy source (Combined Cycle Gas Turbine). If however the exemption does constitute State aid, it could be approved under section F 'Policies, Measures and Instruments for Reducing Greenhouse Gases', points 68-71 of the Community Guidelines on State aid for environmental protection⁽⁸⁾.

2.2. The Commission's preliminary assessment

2.2.1. The existence of State aid

The CCL on electricity is charged to suppliers of electricity. The measure exempts from the levy electricity from CMM. It is assumed that most if not the whole tax exemption is passed on to the electricity generators using CMM as input by the suppliers through higher purchase prices⁽⁹⁾. These generators, which represent a specific category of undertakings are therefore granted an advantage. The advantage is granted through state resources as the State suffers a loss of tax revenues. The recipients exercise an economic activity on markets on which there is trade between Member States. The scheme thereby distorts or threatens to distort competition and could affect trade between Member States.

The Commission does not think at this stage that the selective advantage which the measure grants, is justified by the logic and nature of the tax system itself. The United Kingdom argues that an exemption for technologies which decrease the greenhouse gas emissions from given levels of production from other sources is in the nature of a climate change tax system.

The Commission considers the following. The tax is due because of the harmful effect of the use of energy on climate change. It is therefore in the nature of the tax to exempt the use of energy which production has no harmful effect. This is the case e.g. for electricity from renewable sources, as these sources do not contribute to long-cycle CO₂. Electricity production from CMM has, like electricity production from other fossil sources, harmful effects and is therefore of a different nature than electricity from renewable sources. In fact, electricity production from CMM is not different in terms of CO₂ emissions than electricity production from natural gas. It would therefore be in the nature and logic of the tax system to tax electricity produced from CCM. However, it is true that the use of CMM for electricity production avoids

⁽⁶⁾ The new subparagraph (4) provides for CMM to be regarded as a renewable source in the context of the CCL, in order to allow electricity derived from it to benefit from the same exemption as renewable sources. However, the United Kingdom authorities explained that this drafting serves administrative simplicity and clarity and should not be taken to imply that the Government in fact considers CMM to be a renewable source of energy.

⁽⁷⁾ Commission decision on State aid C 18/01 (ex N 123/2000), published in OJ C 185, 30.6.2001, p. 22.

⁽⁸⁾ OJ C 37, 3.2.2001, p. 3.

⁽⁹⁾ It cannot be excluded that suppliers do not pass on the entire benefit of the exemption and keep a small part of it through their price negotiations with electricity generators using CMM. This is nevertheless supposed to be minimal. In all previous cases concerning exemptions or reductions from eco-taxes on electricity charged to suppliers, the Commission has considered that the real beneficiaries of the aid are the producers of electricity.

CMM released in the atmosphere as the unused CMM is leaking. The Commission is therefore of the preliminary opinion that this does not alter the nature of the support in terms of State aid. The Commission considers that the overall effect on greenhouse gas emissions should be taken into account when assessing the compatibility of the measure with State aid rules.

In conclusion, the Commission thinks at this stage that the tax exemption involves State aid to electricity generators using CMM (see also footnote 4). Such an aid which is not linked to investment is operating aid.

2.2.2. Compatibility of the aid with State aid rules

The Commission at this stage has doubts that the aid is compatible with the Community guidelines on State aid for environmental protection (thereafter the guidelines).

2.2.2.1. The measure envisages a full exemption from an existing environmental tax for a duration of 10 years. Point 51.2 of the guidelines allows tax exemptions from an existing environmental tax for 10 years if the following two conditions are fulfilled at the same time:

- the tax in question must have an appreciable positive impact in terms of environmental protection and
- the derogations for the firms concerned must have been decided on when the tax was adopted or must have become necessary as a result of a significant change in economic conditions that placed the firms in a particularly difficult competitive situation.

The exemption in question is newly introduced and the United Kingdom has not demonstrated a significant change in economic conditions in the abovementioned sense. Therefore the Commission has doubts that the measure complies with point 51.2 of the guidelines.

2.2.2.2. CMM and electricity production from CMM are not renewable energy sources within the meaning of the environmental guidelines and Directive 2001/77/EC of the European Parliament and of the Council of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market⁽¹⁰⁾. In any case, the United Kingdom has not invoked compatibility with the relevant provisions in section E.3.3 of the guidelines related to renewable energy sources and the Commission has doubts that these provisions are respected.

2.2.2.3. Under point 51.3 of the guidelines Member States may also encourage the development of processes for producing electric power from conventional

energy sources such as gas that have an energy efficiency very much higher than the energy efficiency obtained with conventional production processes. In such cases, given the importance of such techniques for environmental protection and provided that the primary energy used reduces significantly the negative effects in terms of environmental protection, a total exemption may be approved for a period of five years where aid is non-degressive. The Commission doubts that this provision is applicable in the present case as it is primarily targeted at supporting particularly efficient generating techniques rather than the use of certain input fuels. In any case, the notified duration of 10 years exceeds the duration of five years permitted under point 51.3 of the guidelines. The conditions of point 51.1 which could allow a ten year duration under point 51.3 do not seem either to be met.

2.2.2.4. The provisions related to waste management and energy saving (points 42 to 46 of the guidelines) do also not seem to be fulfilled. The aid is not degressive, it is not strictly limited to compensating for extra production costs by comparison with the market prices of the relevant product or service, and the aid is not limited to five years. Furthermore it is questionable if the measure could be considered as aiming at managing waste or saving energy.

2.2.2.5. The United Kingdom invoked the application of Section F of the guidelines 'Policies, Measures and Instruments for reducing Greenhouse Gases'. This section is applicable to State aid potentially involved in common and coordinated policies and measures, including economic instruments, and also by means of the instruments established by the Kyoto Protocol itself, namely international emissions trading, joint implementation and the clean development mechanism. The Commission doubts that this section is applicable in the present case.

Equally, Council Regulation (EC) No 1407/2002 of 23 July 2002 on State aid to the coal industry⁽¹¹⁾ does not seem applicable.

Finally, no other legal text based on Article 87(2) or (3) appears to be relevant.

However, climate protection is a Community objective. The Commission recognises the environmental benefit for climate protection that can result from the measure, even if support for such a measure has not been envisaged by the environmental aid guidelines. The Commission at the current stage though has doubts that the design of the measure may lead to overcompensation.

For all these reasons, the Commission at the current stage has doubts that the measure is compatible with Article 87 of the EC Treaty.

⁽¹⁰⁾ OJ L 283, 27.10.2001, p. 33.

⁽¹¹⁾ OJ L 205 of 2.8.2002, p. 1.

The quantity of electricity which could be produced from CMM in the United Kingdom is not negligible. The Commission considers the potential for electricity generation from CMM not only in the United Kingdom but also in other Member States. The Commission also considers that Member States are currently discussing the possibility for a facultative exemption from energy taxation of electricity produced from CMM in the context of the draft directive for the taxation of energy products ⁽¹²⁾. For these reasons, the Commission wants to give third parties the possibility to comment on the measure.

In the light of the foregoing considerations, the Commission, acting under the procedure laid down in Article 88(2) of the

EC Treaty, requests the United Kingdom to submit its comments and to provide all such information as may help to assess the aid/measure, within one month of the date of receipt of this letter. In particular information should be provided as may help to assess if the aid may be compatible directly with Article 87(3)(c) of the EC Treaty.

The Commission wishes to remind the United Kingdom that Article 88(3) of the EC Treaty has suspensory effect, and would draw your attention to Article 14 of Council Regulation (EC) No 659/1999, which provides that all unlawful aid may be recovered from the recipient.»

⁽¹²⁾ Fisc 311 Rev 1 ADD of 9.12.2002.

III

(Informaciones)

COMISIÓN

MEDIA PLUS — DESARROLLO, DISTRIBUCIÓN Y PROMOCIÓN (2001-2005)

Ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas

Convocatoria de propuestas EAC/03/2003

Medidas de apoyo a la participación de obras y profesionales europeos en los festivales de cine organizados en terceros países

(2003/C 69/06)

1. Introducción

La presente convocatoria de propuestas se basa en la Decisión 2000/821/CE del Consejo, relativa a la ejecución de un programa de estímulo al desarrollo, la distribución y la promoción de obras audiovisuales europeas [MEDIA Plus — Desarrollo, distribución y promoción (2001-2005)], adoptada por el Consejo el 20 de diciembre de 2000 y publicada en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas* L 13 de 17 de enero de 2001.

Entre los objetivos de esta Decisión del Consejo se cuentan:

- facilitar y fomentar la promoción y la circulación de las obras audiovisuales y cinematográficas europeas en actos comerciales, en mercados profesionales y en festivales audiovisuales dentro y fuera de Europa, dado que dichos actos pueden desempeñar un papel importante para la promoción de las obras europeas y la interconexión de los profesionales,
- fomentar la interconexión de los operadores europeos mediante el apoyo a acciones conjuntas emprendidas en el mercado europeo e internacional por organismos públicos o privados nacionales de promoción,
- favorecer una difusión transnacional más amplia de las películas europeas no nacionales en el mercado europeo e internacional con medidas que fomenten su distribución y su programación en sala, en especial mediante el fomento de estrategias coordinadas de comercialización.

2. Asunto

La presente convocatoria de propuestas se dirige a las compañías europeas cuyas actividades contribuyan a la consecución

de los objetivos del programa MEDIA, según se describen en la Decisión del Consejo. En ella se explica la forma de conseguir los documentos necesarios para presentar una propuesta a fin de obtener una ayuda financiera comunitaria.

El servicio de la Comisión encargado de gestionar la presente convocatoria es la Unidad «Apoyo a los contenidos audiovisuales» de la Dirección General de Educación y Cultura.

Los organismos y operadores que deseen responder a esta convocatoria y recibir el documento con las directrices para la presentación de propuestas con vistas a obtener una ayuda financiera en el marco del programa «MEDIA Plus: Festival países terceros» deberán enviar su solicitud por correo o por fax a la siguiente dirección:

Sr. D. Jacques Delmoly
Comisión Europea
(B100 4/20)
B-1049 Bruxelles/Brussel
Fax (32-2) 299 92 14
Eac-media@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/avpolicy/media/index_fr.html

La Comisión se compromete a enviar el documento antes citado en un plazo de dos días laborables a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Las propuestas deben ser presentadas antes de la fecha límite de 12 de mayo de 2003.